

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintiséis (26) de julio de dos mil veintiuno (2021)

DEMANDANTE : SANTIAGO DE JESÚS GÓMEZ HENAO
DEMANDADO : ALMACENES ÉXITO S.A.
TIPO DE PROCESO : ORDINARIO (AUTO), RECURSO DE QUEJA
RADICADO NACIONAL : 05-266-31-05-001-2010-00146-03
RADICADO INTERNO : 132-21
DECISIÓN : DECLARA BIEN DENEGADO RECURSO
ACTA NÚMERO : 192

En la fecha, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), oportunidad procesal previamente señalada, El Tribunal Superior de Medellín, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL se constituyó en audiencia pública para resolver sobre el proceso de la referencia. El Magistrado de conocimiento, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, declaró abierta la audiencia y a continuación, la Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el Ponente y acordó la siguiente solución al caso planteado.

ANTECEDENTES

El apoderado de la parte accionante manifiesta en su recurso de queja, que en el auto del doce (12) de abril de dos mil veintiuno (2021), se negó el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, del auto que liquidó en parte la indemnización por mora, argumentando que se trataba de un auto de sustanciación no susceptible de recursos.

Que la inconformidad jurídica con el auto que califica la liquidación de la indemnización por mora como auto de sustanciación se deriva del contenido del auto del 17 de febrero de 2021, porque para llegar a la conclusión allí establecida, respecto a la sanción moratoria, el Despacho debió realizar unas operaciones aritméticas utilizando un multiplicador determinable y un

multiplicador determinado en las sentencias, para obtener el producto. Que el multiplicando, son los días transcurridos desde la fecha de terminación del contrato hasta el pago efectivo de las sumas debidas, y si el multiplicando o el multiplicador tienen un error, el producto que se obtiene conlleva a un error, como concepto matemático y filosófico.

El multiplicando como factor obedeció a un criterio judicial subjetivo y eso hace que tal providencia sea un auto interlocutorio, porque toma una decisión para concretar una condena en abstracto. Advierte, que en el auto del 17 de febrero de 2021, las otras cifras se transcriben objetivamente de las sentencias (si en la transcripción de estas hubiera equivocación se corrigen como error aritmético), pero si en la determinación del multiplicando hay una discusión jurídica, como se presenta en este evento, porque la empresa sostiene que la indemnización por mora se debe liquidar hasta el 8 de noviembre de 2016, tesis que acogió el Despacho y por otro lado, está el criterio de la parte actora, en la cual sostiene que la liquidación por mora debe ser hasta la fecha en que esté ejecutoriado el auto que ordena la entrega de los dineros.

Que los considerandos del auto del 17 de febrero de 2021, cuando refiere a que se dedicó a recoger, retomar o resumir en un solo acto, las condenas y darle paso al proceso, no se compadece con lo ocurrido en la estructura del auto, porque allí se tomó una decisión sobre la conformación del multiplicando, que la parte actora no comparte, con base en precedentes judiciales.

Haciendo un análisis académico, si el Despacho hubiera tomado los días hasta la fecha que ordenó la entrega de los dineros, o hasta que se ejecutorió el auto de cúmplase, no podría discutirse que se está dentro de un auto de sustanciación, porque allí hay una decisión judicial de carácter económico, que liquida una condena proferida en abstracto.

Considera la parte accionante, que en el auto del 17 de febrero de 2021, se cometió un error aritmético a la luz del artículo 286 del CGP, al no determinar el factor multiplicando en la forma que lo ordenó la sentencia del 30 de marzo de 2012, que impuso la mora en forma indefinida, hasta que se realice el pago total de la obligación, hasta que se haga el pago efectivo de la misma, hasta

tanto se verifique el pago total de la obligación, entre otras; que el pago sólo se presenta cuando el trabajador recibe los dineros ,y en este caso, el trabajador nunca se ha negado a recibir y la demandada fue calificada de mala fe.

Considera, que el pago total de la obligación para el trabajador, resulta cuando se ordena la entrega de tales sumas mediante auto que esté ejecutoriado, a la luz del artículo 1626 del código civil; que al realizarse el depósito, no se le comunicó al Juzgado de conocimiento que procediera a entregar dichos dineros, y ese depósito llegó a conocimiento del Juzgado cuando profirió el auto de cúmplase, que ocurrió el 11 de diciembre de 2020, y el juez sólo autorizó entregar los dineros depositados por auto del 18 de febrero del 2021, fecha hasta la cual debe liquidarse la indemnización por mora.

Frente a la conducta de la parte accionada dentro del proceso, manifiesta que la empresa demandada envió un memorial al expediente, anunciando una consignación, cuando se estaba tramitando el recurso de casación, y la entidad no acreditó que ese depósito obedeciera a que el trabajador no estuviera de acuerdo con el pago de esas sumas, o que éste se haya negado a recibirlas y por ello la sociedad se veía forzada a consignar, siendo estos los únicos eventos en que se permite el depósito judicial conforme lo establece el art 65 del CST.

Que las demás consignaciones, no son depósitos judiciales, ni son actos procesales que liberen de la mora, sino que se tratan de conductas de abuso del derecho y de actos de mala fe, cuando no se realiza en una oportunidad procesal adecuad y no se hace por medio del apoderado de la accionada, considerando el apoderado, que la consignación se hizo a espaldas del apoderado de la accionada. Que la empresa cuenta con los datos personales del demandante y del apoderado, por medio de los cuales les podían anunciar el pago directo.

Al concederse el recurso de casación, las condenas de instancia tienen efectos suspensivos, y por ello no existe una obligación, clara, expresa y actualmente exigible, sin que el trabajador pudiera pensar que se iba a realizar una

consignación. Que, al hacerse una consignación sin desistirse del recurso de casación, el A Quo no tiene la oportunidad de autorizar la entrega de ese dinero porque no tiene el expediente en su Despacho y porque no conoce el alcance del recurso de casación, ni la decisión de la Corte y de igual forma, el trabajador no tiene la oportunidad de pedirlo, por el manejo secreto del depósito.

Que la conducta del empleador, se debe determinar como un acto de mala fe, que retardó la entrega efectiva de los derechos.

Con fundamento en lo anterior considera, que la indemnización por mora debe cuantificarse "... en forma indefinida, a razón de un día de salario por cada día de retraso hasta que se realice el pago total de la obligación..." lo que solo sucede cuando se ejecutoria el auto que ordena la entrega de los dineros, por las razones expuestas.

El precedente jurisprudencial en el que sustenta la queja, es en la sentencia SL 4400 de 2014; 2264 del 29 de julio de 1988; 28.090 del 2006.

Con fundamento en lo anterior, solicitó el apoderado de la parte demandante, ordene se conceda el recurso de apelación contra el auto que liquidó la indemnización por mora.

Procede la sala a realizar el estudio del recurso de queja con fundamento en las siguientes

CONSIDERACIONES

Inicialmente, se debe hacer un recuento de lo sucedido en este caso.

A saber, se tiene que, en sentencia de primera instancia, proferida el treinta (30) de marzo de dos mil doce (2012), el Juzgado Adjunto al Laboral del Circuito de Envigado, DECLARÓ que la accionada ALMACENES ÉXITO S.A. terminó sin justa causa y por decisión unilateral el contrato de trabajo indefinido suscrito con el accionante. Y en consecuencia condenó a la accionada al pago

de \$4.805.000 por concepto de aguinaldo, \$2.883.000 por concepto de bonificación especial, \$384.180 por concepto de reajuste de prestaciones sociales, \$101.334.066 por indemnización por despido, **\$63.899.814 por indemnización moratoria del art. 65 del CST, frente a esta última se advirtió que la condena se impone de conformidad con el art. 65 del CST, se sigue causando a razón de un día de salario por cada día de retardo, hasta tanto se verifique el pago total de la obligación pendiente;** le ordenó a la accionada a hacer los reajustes a las cotizaciones realizadas en los años 2007, 2008 sobre el salario promedio de dichos años, teniendo en cuenta las prestaciones extralegales, aguinaldo 50 días de salario básico, y bonificación especial de un mes de salario, constitutivas de salario ambas y para el año 2009 sobre el salario promedio mensual de \$2.332.132. al fondo de pensiones en el cual esté afiliado el actor durante la relación laboral. E impuso costas a cargo de la parte vencida, la cuales se tasarían oportunamente por la secretaría del Juzgado conforme al Acuerdo 1887 de 2003 (fls. 307 a 336).

En segunda instancia, el Tribunal en Superior de Medellín, Sala Segunda Dual de Descongestión Laboral, adicionó la sentencia de primera instancia y condenó a pagar al demandante por concepto de perjuicios morales, la suma de \$20.000.000; y la indexación por concepto del no pago oportuno de la indemnización por despido injusto desde la fecha de terminación del contrato de trabajo y hasta la fecha del pago. Confirmó en lo demás la sentencia. Sin costas en esta instancia (fls. 373 a 397).

Luego ante el recurso de casación interpuesto, la Corte Suprema de Justicia en Providencia del quince (15) de abril de dos mil veinte (2020), dispuso NO CASAR la sentencia proferida el 17 de abril de 2015 por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Medellín. E impuso costas en la suma de \$8.480.000 a cargo de la sociedad recurrente (fl. 560 a 576 del expediente digital).

A fls. 417 y 418 se aporta comprobante de consignación realizado por la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A. por la suma de \$371.390.194. A fl. 419 el apoderado de la parte accionante solicita la entrega de dineros.

Mediante **auto del diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021)**, el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado, resolvió la solicitud de entrega de los títulos judiciales elevada por la parte accionante, con las que se cancelan las condenas impuestas. En este auto, se hizo un recuento de las condenas realizadas a la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A. donde se determina entre otros conceptos y valores: “SANCIÓN MORATORIA ART. 65: \$63.899.814, más el valor causado con posterioridad a la sentencia \$128.810.209, suma liquidada hasta el momento en que fueron consignados los valores, generadores de dicha sanción”; se plasma que la suma adeudada es de \$379.996.627, más los reajustes de los aportes en pensión para los años 2007 y 2008; y que la suma consignada por la parte demandada ascendía a \$379.462.374. Concluyendo la procedencia de la entrega de los títulos consignados a favor del apoderado de la parte accionante (fls. 420 a 421).

En memorial visible a fls. 422 a 423, el apoderado de la parte accionante interpone recurso de reposición y en subsidio de apelación frente al **auto que liquida el proceso el 17 de febrero de 2021**, al señalar que la liquidación de mora posterior a la sentencia, es de \$128.810.209 bajo la consideración que va hasta el momento en que fueron consignados los valores generados de dicha sanción, porque la sentencia ordenó liquidar la indemnización por mora hasta el momento en que se verifique el pago de la obligación, la cual se surte cuando esté ejecutoriada la orden judicial según su criterio y el según el precedente judicial.

Que en caso de considerarse que no se trata de un auto que liquida el proceso de oficio, considera que se cometió un error aritmético en el auto en mención, al no haberse tomado como factor de multiplicación, la totalidad de los días transcurridos entre la fecha de terminación del contrato de trabajo y la fecha de ejecutoria del auto que ordena la entrega del dinero, que es el momento en el cual se entiende que se ha verificado el pago, y por ello el resultado es mayor.

Y por tratarse de un evento de dificultad académica procesal, considera que debe acudir a promover incidente de liquidación en los términos del citado art.

283 del CGP, por tanto, solicitó se señale cual es el procedimiento con el cual se debe tramitar la presente inconformidad jurídica.

Sustentó su inconformidad, en que en el auto del 17 de febrero de 2021 se señaló "SANCIÓN MORATORIA ART. 65. \$63.899.814, más el valor causado con posterioridad a la sentencia \$128.810.209, suma liquidada hasta el momento en que fueron consignados los valores, generados de dicha sanción...". Por lo tanto la inconformidad se presenta contra la liquidación de la indemnización moratoria tasada en \$128.810.209 porque el depósito de ciertas sumas ocurrió el 13 de diciembre de 2016; dicho deposito llegó al Juzgado de conocimiento, después de que se profirió el auto de cúmplase que ocurrió el 11 de diciembre de 2020, y solo se autorizó la entrega de los dineros depositados, por auto del 18 de febrero de 2021, por lo que considera que hasta dicha fecha se debe liquidar la indemnización por mora. En conclusión, solicitó liquidar la indemnización por mora del art. 65 del CST y SS entre la fecha de terminación del contrato de trabajo y la ejecutoria del auto del 17 de febrero de 2021. (fls 422 y 424).

Con relación al recurso de reposición presentado por la parte accionante, el apoderado de la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A. manifiesta en referencia al auto del 17 de febrero de 2021, que no existe recurso de reposición ni apelación y lo pretendido es la corrección de un error aritmético inexistente. Que los argumentos de la parte accionante se encaminan a desconocer el pago de la sanción moratoria por parte de la sociedad demandada y alargar el tiempo y permanecer en forma indefinida el pago de la sanción en mención, lo que se traduce en un mayor valor a costa de la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A..

Que el argumento de no ser válida la consignación a órdenes del Juzgado, dentro del trámite de un proceso ordinario laboral, denota falta de apego a la realidad y a la lealtad procesal. Que no se está frente a un pago por consignación como lo alega la parte accionante, sino que se trata del cumplimiento de una sentencia y por la cual pretende se dé inicio a un proceso ejecutivo a continuación del ordinario en el evento de falta de pago; la interpretación de existir cumplimiento de la obligación emanada de una

sentencia solo al momento de la ejecutoria de ella, y cuando la orden judicial de entregar los depósitos al demandante, es equivocada al no existir norma ni actuación procesal que así lo indique. Cita la sentencia C 781 de 2003 que declaró inexecutable el aparte del art. 65 que indicaba “o si presentara la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial” bajo el entendido que la sanción existe por la falta de pago de salarios y prestaciones sociales y la misma va hasta la fecha en que se realice el pago y no hasta que una providencia así lo señale. Que no es la accionada la responsable de la duración de un proceso judicial. Que las sentencias a invocadas por la parte accionante no son aplicables al caso concreto y el alcance pretendido no es de recibo al no estar en presencia de un pago por consignación y más porque el demandante y su apoderado hacían parte del proceso cuando se realizó el pago, y se realizó en el año 2016 un pago cuando se encontraba en curso el recurso extraordinario de casación frente a los conceptos sobre las que su representada no presentó discrepancia.

Razonó que en el auto del 17 de febrero de 2021 no se hace una liquidación como se expone por la parte accionante, sino que se trata de un cálculo de las condenas y lo que se pagó por la sociedad demandada, a efectos de determinar si se fragmentaba o no el título y proceder a la entrega de los dineros. Por lo que es la sentencia la que contiene las condenas y es la que se ejecuta y no un auto de sustanciación como lo es el del 17 de febrero de 2021, el cual no tiene recurso (art. 64 del CPT y SS) porque en él no se decide nada y solo se da trámite al proceso, lo que hace que sea improcedente los recursos interpuestos por la parte accionante y por lo que tampoco hay lugar a corregir errores aritméticos que no los contienen. Que tampoco hay lugar a la aplicación del art. 283 del CGP correspondiente al incidente de liquidación, porque procede para condenas en abstracto que estén contenidas en la sentencia y en el auto atacado no hay condena alguna por tratarse de un auto de sustanciación.

De conformidad con lo anterior, solicita que no sean de recibo las peticiones de la parte accionante y se denieguen los recursos presentados, la corrección de error aritmético y el incidente de liquidación. (fls. 428 a 429)

Al respecto el Juez de primera instancia, en auto del doce (12) de abril de dos mil veintiuno (2021), para resolver el recurso de reposición presentado contra el auto de sustanciación del 17 de febrero de 2021, mediante el cual se retomó las condenas impuestas en la sentencia, la cual está en firme, hace la claridad que contra los autos de sustanciación no es procedente interponer recurso de reposición o apelación por tratarse de providencias judiciales que se encargan de dar el dar el paso a paso del proceso y no resuelven asuntos porque ya se encuentran en firme, sin embargo la segunda providencia judicial puede ser recurrida al ser proferidas en desarrollo del objeto del proceso y son motivadas. Y en este sentido aclaró el Juzgado, que el auto que objetó la parte, solo se limita a recoger y retomar las condenas que se encuentran en firme. Retoma apartes del art. 283 del CGP y que el argumento presentado por la demandada frente al recurso presentado por la parte accionante es que es sentencia es la que se ejecuta y no un auto de sustanciación como el del 17 de febrero, el cual no tiene recurso conforme se indica en el art. 64 del CPT y SS porque solo da tramite (fls. 430 a 431).

Visto lo anterior y analizado el plenario en su conjunto, considera la Sala que la negación del recurso apelación se encuentra ajustada a derecho, en primer lugar, porque el auto mencionado por la parte demandante no es susceptible de recurso de apelación al no encontrarse taxativamente consagrado en el artículo 65 del C.T.P y ss que reza:

“PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN. Son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:

1. El que rechace la demanda o su reforma y el que las dé por no contestada.
2. El que rechace la representación de una de las partes o la intervención de terceros.
3. El que decida sobre excepciones previas.
4. El que niegue el decreto o la práctica de una prueba.
5. El que deniegue el trámite de un incidente o el que lo decida.
6. El que decida sobre nulidades procesales.
7. El que decida sobre medidas cautelares.
8. El que decida sobre el mandamiento de pago.
9. El que resuelva las excepciones en el proceso ejecutivo.
10. El que resuelva sobre la liquidación del crédito en el proceso ejecutivo.
11. El que resuelva la objeción a la liquidación de las costas respecto de las agencias en derecho.
12. Los demás que señale la ley.”

Y en segundo lugar, porque en este evento nos encontramos en un proceso ordinario laboral, y no en el proceso ejecutivo, pues en este último, si se pueden presentar las inconformidades planteadas en este caso por el actor, relacionadas con la oposición a la liquidación realizada por el juzgado pero en la etapa de liquidación del crédito establecida en el artículo 446 del C.G.P, mas no en esta oportunidad, pues se itera, que nos encontramos es en el curso de un proceso ordinario laboral donde no existe ninguna etapa procesal de liquidación del crédito y mucho menos en un incidente de liquidación como lo denomina el apoderado del demandante.

En este sentido, el auto del 17 de febrero de 2021, corresponde a un auto impulso del proceso, por medio del cual el Juzgado, **claramente realizó una liquidación a efectos de realizar la entrega de los títulos judiciales solicitados por la parte accionante y con ello evidenciar si el titulo consignado se debía o no fraccionar.**

Así las cosas, en el evento que la parte accionada se encuentre inconforme con la liquidación de la sanción moratoria y con fundamento en ello, considere que existe un saldo insoluto, es en el proceso ejecutivo en donde se debe resolver dicha inconformidad, pero no atacando el auto de sustanciación del 17 de febrero de 2021, pues como ya se mencionó dicho auto no es susceptible del recurso de apelación.

En razón de lo anterior, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, EN CABEZA DE MAGISTRATO PONENTE DE LA SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL,

RESUELVE

PRIMERO: Se **DECLARA BIEN DENEGADO** el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante contra el auto emitido por el juzgado de conocimiento del Doce (12) de abril de 2021, dentro del proceso ordinario laboral promovido por el Sr. SANTIAGO DE JESÚS GÓMEZ HENAO contra ALMACENES ÉXITO S.A., por ser improcedente dicho recurso

Radicado Único Nacional 05-266-31-05-001-2010-00146-03
Radicado Interno: 132-21

y no ajustarse a los requisitos legales para su interposición, según lo argumentado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Notifíquese la presente decisión por ESTADOS y devuélvanse las diligencias al Juzgado de origen, para lo de su competencia.

Los Magistrados,



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
– SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 130 del 27 de julio de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100>